

Es copia que certifico. Monterrey, Abril 20 de 1874.—*Amado Valdes*, secretario.

Pedimento del C. Fiscal de la Suprema Corte de Justicia.

El fiscal interino dice: que en 14 de Enero del presente año, el Juzgado de Distrito de Nuevo Leon, comenzó á practicar unas diligencias contra varios Ciudadanos que en las elecciones municipales, verificadas á fines del año próximo pasado, fueron declarados por la junta ó comision escrutadora, miembros del Ayuntamiento de la Ciudad de Monterrey, que debia funcionar en 1874; y como esa declaracion fué nulificada por decreto expedido en 23 de Diciembre último por la Legislatura del Estado, los Ciudadanos electos, publicaron por la prensa un manifiesto al público, y dirijieron unas comunicaciones á la Corporacion municipal saliente, con el fin de que les entregase ó pusiese en posesion de sus cargos, expresando que en caso contrario protestaban dejar á salvo sus derechos para ejercitarlos por las medidas legales cuando lo juzgasen conveniente.

Con motivo de las declaraciones contenidas en dichos documentos, el C. Gobernador del Estado acusó de rebellion á los CC. que suscribieron aquellas, manifestando al C. Juez de Distrito, que se las consignaba para que fueran juzgadas con arreglo á la ley de 6 de Diciembre de 1856. Este Juez consideró los hechos denunciados, mas como delitos contra la paz y el orden público; y por tal motivo se declaró incompetente, y remitió á revision sus actuaciones al Tribunal de Circuito respectivo. Este Tribunal revocó el auto del inferior, y mandó devolverle las actuaciones con el fin de que practicara en debida forma la correspondiente averiguacion de la que tal vez podrian resultar cargos fundados contra los acusados.

Practicada la averiguacion como lo previno el superior, y no apareciendo méritos

para continuar las diligencias comenzadas, el Juez de Distrito sobrescyo en ellas, con fecha 13 de Abril proximo pasado, cuyo auto de sobreseimiento fué confirmado por sus propios y legales fundamentos, y por el referido Tribunal de Circuito, con la declaracion de que el procedimiento en nada perjudicaba el buen nombre y reputacion de los CC. acusados.

El Fiscal interino encontrando arreglados á derecho los procedimientos de ambos jueces, pide á la Sala de por revisado el proceso, sirviendose ademas declarar que no hay motivo para exigir la responsabilidad á dichos Jueces.

México, Junio 2 de 1874.—*García Ramírez*.

Auto de revision de la Suprema Corte de Justicia.

México, Junio 2 de 1874.—Por revisado, y no apareciendo mérito para la responsabilidad, devuélvanse las actuaciones y archívese á su vez el Toca.—*José M. Iglesias*.—*Juan J. de la Garza*.—*Ignacio M. Altamirano*.—*Simon Guzman*.—*L. Velasquez*.—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia. México, Junio 6 de 1874.—*Alejo Gomez Elguarte*, oficial segundo.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Querétaro por el C. José S. Juárez, contra la providencia dictada por el C. Juez de letras de la Capital del Estado, mandando separar de su lado á su hijo menor que aun esta bajo la patria potestad.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que el C. José

S. Jauregui, ha pedido amparo con motivo de habersele separado de un hijo suyo, extrayéndolo de su casa por Orden del C. Juez de letras de lo civil de esta ciudad.

Este procedimiento se ha fundado en haberlo solicitado la madre del niño, quien tiene pendiente un juicio de divorcio con el quejoso.

La medida se ha dictado de interinaria, á manera de providencia precautoria, y después de varias pruebas rendidas á propósito, para demostrar que hay razon legal para separar por ahora al niño del padre.

La patria potestad no hace al padre dueño del hijo; pero su ejercicio constituye el ejercicio de un derecho adquirido y determinado por el Código civil.

El artículo 394 dice á este respecto, que mientras el hijo estuviere en la patria potestad, no podrá dejar la casa del que la ejerce, sin permiso de este, ó de decreto de la autoridad pública competente. Como este decreto exista en el caso, no hay violacion de derecho adquirido que pudiera dar cabida á un recurso como el presente.

La patria potestad se ejerce en primer lugar por el padre, y en segundo lugar por la madre; solo por muerte ó interdiccion del padre, entrara al ejercicio de ella la madre, (artículo 392 y 393 del Código civil); como en el caso exista esa interdiccion, no hay violacion de derecho adquirido, ni lugar para la coneccion del recurso intentado.

En suma, aunque el derecho de patria potestad este radicado esencialmente en el padre, puede suspenderse su ejercicio por decreto de la autoridad judicial; y así sucede en el caso presente.

Por lo que el Promotor fiscal pide, se sirva V. negar el amparo solicitado.

Querétaro, 8 de Mayo de 1874.—*Luis Castañeda.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Querétaro, Mayo 28 de 1874.—Visto el presente juicio de amparo promovido por el C. José S. Jauregui, contra el C. Juez de letras de esta Capital, á virtud de reputar violadas en su persona las garantías que otorga la nConstitucion en sus artículos 14 y 16, al ser separado de su lado su hijo que aun esta bajo la patria potestad; los informes rendidos por la autoridad ejecutora del acto reclamado; lo pedido por el C. Promotor fiscal y la citacion para sentencia. Resultando: que el quejoso hace consistir la violacion de garantías, en que conservando á su hijo bajo la patria potestad le fué quitado; que admitido el ocurso de su esposa en el incidente de extraccion del niño, no debió admitirse el de la abuela materna, como lo hizo el Juez de letras, por ejercer primero los derechos de la patria potestad, la madre que la abuela, conforme al artículo 392, parrafo 2º del Código civil; y por último, por que el artículo 269 en que se fundó el pedido y la resolucion judicial, habla de providencia que se considere benéfica á los hijos menores, sin poderse tener como tal, el separar á un hijo de su padre, deduciendo de allí que la ley no se aplicó exactamente al caso y fué molestado en su familia sin causa legal. Resultando: que del informe del C. Juez de letras aparece, que ante él tiene promovido juicio de divorcio la Sra. Lucía Nuviño esposa del quejoso, y en un incidente de ese juicio pidió se quedase en su poder su hijo menor José, apoyando su pretension en la mala alimentacion y ejemplo que al lado de su padre recibe; á cuyo pedido se adhirió la abuela materna Dª Luisa Guerra, razones que considerandolas justas el Juzgado, decretó la separacion del referido menor del lado de su padre, de una manera provisional é interina, fundándose en la frac. 2º del artículo 266 y 269 del Código civil, entregándolo á su Sra. madre Lucía Nuviño y mandando practicar la informacion respectiva, fojas 9 y 14.

Considerando: que el sentido en que el quejoso hace aplicacion del artículo 14 de la Constitucion al caso presente, no es el que se deduce de su letra y espíritu, pues de él no se infiere que cuando un Juez haga una mala aplicacion de una disposicion legal, ya sea por ignorancia ó mala interpretacion, se tenga por violada esa garantía individual, sino que tan solo prescribe que la ley sea dada con anterioridad al hecho y aplicable á él, por el Tribunal que previamente aquella haya establecido; siendo fuera de duda que el acto del C. Juez de letras tiene estos requisitos; que caso de haber sido mal aplicados los artículos del Código civil, el quejoso tiene los recursos legales que las leyes comunes señalan, para evitarse el daño que de esto se le origina.

Considerando: que el artículo 16 tampoco puede tenerse como infringido, pues el Juzgado, única autoridad competente, al decretar la separacion del menor, fundó y motivó la causa legal de su procedimiento, en el auto proveído por él en 18 del pasado, fojas 9; que si el C. Jáuregui no juzga como legal la que el Juzgado tuvo prerenente para decretar su providencia, esto sería igualmente razon para intentar los recursos que las leyes comunes le conceden. Atendiendo por último, á que el presente recurso tiene tan solo por exclusivo objeto evitar ó reparar la violacion de cualquiera garantía que la Constitucion federativa conceda al hombre, y nunca mezclarse en la tramitacion ó decision de los negocios judiciales que tienen sus leyes y Tribunales respectivos, cuyas leyes conceden á los Ciudadanos los recursos necesarios para evitarse los perjuicios que por distintas causas puedan sufrir, como antes se ha dicho.

Por estas razones, de conformidad con lo pedido por el C. Promotor fiscal, y con fundamento de los artículos 101 y 102 de la Constitucion general y del 8 de la ley de 20 de Enero de 1869, debía fallar y fallo: que la Justicia de la Union no ampara ni

protege al C. José S. Jáuregui, contra el acto del C. Juez de letras de esta Capital, que separa de su lado á su hijo menor José.

Notifíquese; compúlsense las copias respectivas, y elévase á la Suprema Corte de Justicia este expediente para los efectos legales.

Así definitivamente lo decretó el C. Juez de Distrito del Estado Lic. Victor de la Peña, y firmó.—Doy fé.—*V. de la Peña.*—*Francisco Ruiz*, secretario.

Es copia. Querétaro, Mayo 30 de 1874.—*Francisco Ruiz*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, 5 de Junio de 1874.—Visto el recurso de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Querétaro por el C. José S. Jáuregui, contra la providencia dictada por el C. Juez de letras de la Capital del Estado, mandando separar de su lado á su hijo menor, que aun está bajo la patria potestad, violando con tal procedimiento las garantías consignadas en los artículos 14 y 16 de la Constitucion federal. Visto el fallo del inferior con todo lo demás que se tuvo presente y ver convino.

Por sus mismos y legales fundamentos, se confirma la sentencia pronunciada en 18 de Mayo último, por el C. Juez de Distrito de Querétaro, que declaró: que la Justicia de la Union no ampara ni protege al C. José S. Jáuregui, contra el acto del C. Juez de letras de dicha Ciudad de Querétaro, que separó de su lado á su hijo menor José.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias.*—*Miguel Auza.*—*Juan J. de la Garza.*—*José María Lozano.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*Manuel de Castañeda y Nájera.*—*Ignacio M. Altamirano.*—

Simon Guzman.—M. Zavala.—José García Ramírez.

Es copia que certifico. México, 6 de Agosto de 1871.—*Enrique Landa.*

COMPETENCIA

Suscitada entre el Juzgado de 1ª instancia de Veracruz y el 4º de lo civil de esta capital, para conocer del juicio que sobre el pago de una cantidad de pesos y rendición de cuentas, ha promovido D. Ignacio Trigueros contra D. Luis Estanislao Hargous, en la persona de su apoderado D. Jorge de la Serna.

PEDIMENTO DEL C. FISCAL DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA.

El Fiscal interino dice:

Que el Juzgado de 1ª instancia de la ciudad de Veracruz, á petición de D. Jorge de la Serna residente allí, ha suscitado competencia de jurisdicción al Juez 4º de lo civil de esta Capital, á fin de que se inhiba del juicio que sobre pesos y rendición de cuentas tiene promovido D. Ignacio Trigueros, contra D. Luis E. Hargous, de quien es apoderado general el expresado Serna.

El origen de la competencia según aparece de las constancias de los autos, se explica por los siguientes hechos:

En el mes de Enero de 1870 que estuvo en esta Capital, le hizo varias reclamaciones D. Ignacio Trigueros, procedentes de negocios mercantiles que habían tenido entre sí en años anteriores, y no queriendo Hargous disentir dichos negocios por tener que ausentarse de esta Ciudad, constituyó un apoderado especial radicado en esta misma capital, con el cual pudiera entenderse el reclamante extrajudicial ó judicialmente para el efecto de dilucidar y depurar dichas reclamaciones. Con tal objeto, Hargous otorgó poder especial á favor de los Sres.

I. R. y Compañía de este comercio, con todas las instrucciones necesarias para el caso. La parte de Trigueros procuró arreglarse con esto apoderado; pero no habiendo tenido sus pretensiones un resultado favorable, intentó la reconciliación ante el Juez 2º menor de esta capital en 8 de Febrero del mismo año de 1870; en este auto conciliatorio, D. Ildelfonso Cardaña contestó por Hargous, que este no había tenido negocios ni cuentas con Trigueros, y que por lo mismo no había materia para la liquidación que se le demandaba.

Tal era el estado que guardaba este negocio hasta el 20 de Julio de 1871, en que presentó Trigueros su escrito de demanda ante el Juzgado 4º de lo civil de esta capital, el cual mandó correr traslado de dicho escrito á Cardaña; y no habiendo ido este ni á sacar los autos para contestar á solicitud del actor se le declaró rebelde, fijándole un breve término para evacuar el traslado; con este fin pidió el demandado, que se le entregaran los autos, y después de acusada otra rebeldía los devolvió con escrito firmado por D. Angel Lerdo de Tejada, patrocinado por D. Cornelio Prado, manifestando en él, como socio de Cardaña, que este había fallecido y la compañía estaba disuelta; que por estos motivos había concluido el poder conferido por Hargous á la misma compañía, y en consecuencia, que la demanda debía entenderse con el referido Hargous ó con su apoderado general D. Jorge de la Serna quien accidentalmente se encontraba en esta capital. Visto este escrito por el actor y á petición suya, el Juzgado decretó: que se notificara al apoderado general mencionado, el escrito de demanda. Cumplido este auto y pasado el término legal para contestar, se conminó á dicho apoderado con declararlo rebelde y dar por contestada la demanda, si en el término que se le señaló no evacuaba el traslado pendiente; con tal objeto se entregaron los autos al Lic. ya citado D. Cornelio Prado, por haberlo así solicitado D. Jorge de la Serna